



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

**CAMARA APEL. CIV.COM.TRABAJO Y
FAMILIA S2 - BELL VILLE**

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 49

Año: 2025 Tomo: 1 Folio: 173-175

EXPEDIENTE SAC: 13672462 - SERVI PAMPA ESCALANTE SRL C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA Y OTRO - AMPARO LEY 4915

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 49 DEL 10/04/2025

AUTO NÚMERO: cuarenta y nueve (49).

CÁMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Bell Ville, diez de abril de dos mil veinticinco.

Y VISTOS: estos autos caratulados “SERVI PAMPA ESCALANTE SRL C/
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y OTRO -
AMPARO LEY 4915 (Expte. 13672462), de los que resulta que con fecha 17 de
marzo de 2025 la actora inicio juicio de amparo en contra del Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba, en los términos de art 43, de la Ley 4915, fundado en la
imposibilidad de ejercicio del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, por no
permitírsele presentar recurso administrativo a través de plataforma CIDI. Requiere a
este Tribunal que dicte medida cautelar de no innovar, toda vez que se ven violentados
los derechos de su parte. A tal fin peticiona que se ordene a la Dirección General de
Rentas que se abstenga de iniciar el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el
Código Tributario Provincial tendiente a lograr el cobro compulsivo de las diferencias
determinadas en la Resolución R-LA-005159/2024, hasta tanto se resuelva el presente,
toda vez que la medida adoptada por dicho organismo resulta arbitraria, improcedente

y no ajustada a derecho, y que en el caso de no adoptarse la presente medida urgente, el inicio de la ejecución puede afectar gravemente el patrimonio de su representada, inclusive puede verse afectado su giro comercial por los embargos que los agentes fiscales de Rentas podrían efectuar. Considera que el pedido de esta medida cautelar es indispensable, ya que el fisco, al considerar que está firme la liquidación, puede intimar e iniciar el cobro compulsivo, tal como surge del último párrafo del art. 61 de la Ley 6.006 que transcribe: “(...) *Si los deudores no cumplen con la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado a tal efecto, la Dirección intimará de pago a los responsables enumerados en el artículo 37 de este Código -excepto los del inciso 6)-, por la deuda tributaria del contribuyente (...)*”. Con relación al cumplimiento de los requisitos cautelares, entiende que la verosimilitud del derecho (“*fumus bonis iuris*”) surge en forma inequívoca de los Tratados Internacionales enumerados en el presente libelo, en concordancia con lo normado por Ley 24.425, en respeto de los principios constitucionales derivados del art. 14 y 75, inc. 22, de la Carta Magna argentina, que brindan la requerida verosimilitud en el derecho de lo que peticiona. Afirmo que -sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí permite considerar que en el caso existe verdadera certeza sobre la bondad del derecho alegado- no huelga recordar que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha sentado una importante pauta interpretativa para el análisis de este requisito (conf. CSJN- Fallos 306:2060), al señalar que “(...) *las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (...)*”. Con respecto al requisito de peligro en la demora, vuelve a citar a la Corte, al que dicho tribunal ha establecido que “(...) *el*

examen de la concurrencia del recaudo aludido pide una apreciación atenta de la realidad comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia” (CSJN, julio 11-1996, 'Milano, Daniel R. c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social'). Entiende que la demora de provisión de la medida definitiva generaría gravísimos e irreparables perjuicios patrimoniales a su parte y que la demora en resolver podría traer aparejado el embargo de las cuentas corrientes de su representada lo que entorpecería su normal giro comercial. Ofrece contracautela. Así, pasan a despacho las presentes a despacho a los fines de resolver;

Y CONSIDERANDO: **I.-** Que, la medida cautelar solicitada consiste en que se ordene a la Dirección General de Rentas que se abstenga de iniciar el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Tributario Provincial, tendiente a lograr el cobro compulsivo de las diferencias determinadas en la Resolución R-LA-005159/2024, hasta tanto se resuelva el presente. Cabe señalar en primer término que "prima facie" se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la cautelar solicitada, ello es, verosimilitud del derecho invocado y peligro en la demora por la irreparabilidad de las consecuencias si la medida no se efectiviza prontamente, como se desprende de los hechos relatados en la demanda y documental incorporada en archivos adjuntos electrónicamente, dentro del marco de sumariedad y provisoriedad que la naturaleza de la medida conlleva, sin que ello implique adelantar criterio sobre el fondo de la cuestión a resolver.

Que, en cuanto al primero de los recaudos señalados se advierte que la parte actora no habría podido transitar de manera efectiva la vía administrativa, debido a cuestiones burocráticas que no le serían imputables. Tal circunstancia podría configurar una afectación al debido proceso y al derecho de defensa, que no le habría permitido al

administrado cuestionar debidamente la pretensión fiscal antes de que esta adquiriera efectos ejecutorios. Ello torna razonable la necesidad de evitar el avance de la acción del organismo fiscal en el sentido requerido. En efecto, con la documental acompañada, constancias de print de pantallas de intercambio de correspondencia con el organismo fiscal provincial y copia de resolución administrativa, luce “ab initio” razonable el temor de la accionante con relación a los perjuicios patrimoniales que puede sufrir si se permite el avance de la Administración en el inicio de la causa contencioso administrativo, que da cuenta de la falta de una respuesta acorde por la vía administrativa esgrimida, es decir en la plataforma digital del organismo fiscal.

II.- En cuanto al segundo de los requisitos mencionados -peligro en la demora- resulta un hecho notorio que cualquier ejecución significaría un perjuicio patrimonial claro y concreto que implicaría (en el contexto dado por la petición) la necesaria y rápida respuesta jurisdiccional ante la posibilidad de que aquélla afecte de modo sustancial la capacidad de afrontar obligaciones económicas y el equilibrio financiero del particular. En ese marco, la eventual ejecución de tributos discutidos sin que se hubiere garantizado el pleno ejercicio del derecho de defensa podría derivar en perjuicios de muy difícil reparación ulterior.

III.- Como recaudo de contracautela, se han ofrecido y ratificado en el Registro Electrónico habilitado a tal fin, las fianzas de tres letrados de la matrícula, que fueran solicitadas por el Tribunal.

Por todo ello el Tribunal, **RESUELVE:**

I.- Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y -bajo la responsabilidad de las fianzas ofrecidas y ratificadas en los presentes- ordenar a la Dirección General de Rentas que se abstenga de iniciar el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el Código Tributario Provincial, tendiente a lograr el cobro compulsivo de las diferencias determinadas en la Resolución R-LA-005159/2024,

hasta tanto se resuelva el presente.

II.- Protocolícese y hágase saber.

Texto Firmado digitalmente por:

MIGUEL Juan Pablo

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2025.04.10

GONELLA Jose Maria

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2025.04.10

ABAD Damian Esteban

VOCAL DE CAMARA

Fecha: 2025.04.10

BAEZA Mara Cristina

SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA

Fecha: 2025.04.10